PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Derógase el inciso segundo del artículo 11.3 del Código General del Proceso.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El art. 39 de la Ley N° 19.924 agregó al art. 11.3 del Código General del Proceso (CGP), el siguiente inciso: *“Las sentencias condicionales o de futuro no podrán contener ni recaer sobre aquellas materias reservadas constitucionalmente a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que involucren o versen sobre las materias previstas en el inciso primero del artículo 86 y en el artículo 214 de la Constitución de la República”*.

Con esta disposición se pretende excluir la condena “condicional” o de “futuro”, solo a los casos de condena contra el Estado que tengan relación con la materia presupuestal, o que requieran de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Esto obliga a los litigantes que hayan obtenido sentencia favorable firme, que condene al Estado a pagar una suma de dinero devengada con cierta periodicidad (generalmente retribuciones mensuales), a volver a iniciar nuevo juicio antes de consumarse la prescripción o caducidad de sus créditos (art. 39 de la Ley N° 11.925 o art. 8 de la Ley N° 16.226 según el caso).

Esta norma, cuya derogación se pretende con este Proyecto de Ley, atenta contra los principios de celeridad y economía procesal –arts. 3 y 9 de CGP -, careciendo de todo sentido obligar a los justiciables a iniciar nuevos juicios, cada 4 años, con todos los costos y la carga de trabajo que todo ello implica para el Poder Judicial.

También genera una discriminación injustificada múltiple, atentando contra el

art. 8 de la Constitución y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica (Ratificado por Uruguay por Ley N° 15.737):

a) se discrimina entre sujetos condenados según sean públicos o privados, donde se le otorga un tratamiento preferencial al Estado cuando resulte condenado, excluyéndolo de una posible “condena condicional o de futuro”;

b) se discrimina entre trabajadores públicos y privados, ya que el trabajador privado cuenta con la ventaja de una posible condena a futuro conforme el art. 11.3 del CGP, no así el trabajador público¹;

c) se discrimina entre los que ya cuentan con condena a futuro por idénticas causas o causas similares y los que inician nuevo juicio a partir de la Ley N° 19.924.

Sentencias de la Suprema Corte de Justicia que por unanimidad han declarado inconstitucional el inciso segundo del art. 11.3 del CGP: Por unanimidad de sus miembros naturales, la Suprema Corte de Justicia en Sentencias N° 1080/2022; 1255/2023; 1275/2023; 42/2024; 79/2024; 163/2024; 175/2025; falló: *“DECLÁRASE INCONSTITUCIONAL E INAPLICABLE A LA PARTE ACTORA EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 11.3 DEL CGP (AGREGADO POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY No. 19.924)”*.

Los fallos precitados se fundan en que, la norma en cuestión, vulnera los siguientes principios de raigambre constitucional:

A) PRINCIPIO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA: La Corte citando prestigiosos autores como Vescovi y Gelsi Bidart, así como la Sentencia 312/2003, considera que el art. 11.3 en cuanto a la condena a futuro es aplicable de forma genérica.

Repasando abundante jurisprudencia, el Alto Cuerpo expresa que *“la norma*

¹ El trabajador público si reclama diferencias salariales tendrá vedada la “condena de futuro”, debiendo iniciar juicios cada 4 años, en tanto el trabajador privado sí tendrá a su favor una posible “condena de futuro y, además, ya cuenta con un juicio sumarísimo para el cobro de deudas laborales (Leyes 18.572 y 18.847) y en caso de sentencia favorable podrá pasar de inmediato a la vía de apremio para el cumplimiento forzado de la sentencia.

atacada vulnera el principio en estudio, especialmente en sus vertientes del derecho de acceso pleno y efectivo a un tribunal jurisdiccional para plantear una insatisfacción jurídica y del derecho a contar con mecanismos efectivos de ejecución de las resoluciones de los tribunales”.

“...resulta claro que la norma restringe, en forma injustificada e irrazonable, el derecho de acceso a la justicia para el planteo de una insatisfacción jurídica”.

“Cabe recordar que la norma legal impugnada prohíbe el dictado de sentencias condicionales o de futuro contra el Estado en una serie de materias (las reservadas constitucionalmente a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que involucren o versen sobre las materias previstas en los artículos 86 inciso 1º y 214 de la Constitución)”.

“De esta manera, la ley atacada establece un impedimento total y absoluto a los funcionarios públicos para plantear pretensiones de condena a futuro contra el Estado en materia de modificación de dotaciones (entre otras). En consecuencia, aquellos funcionarios que aleguen tener derecho a percibir determinadas partidas salariales, no pueden acceder a un proceso en el que sea posible disponer una condena a futuro al Estado a abonarles las partidas correspondientes (en caso de que los Tribunales estimen de recibo la pretensión), ya que la ley prohíbe, en forma absoluta, el dictado de tal tipo de sentencias en esta materia”.

“Lo anterior significa que los funcionarios estatales, luego de tramitar un proceso judicial, con todas las instancias correspondientes, en el que logren el dictado de una sentencia favorable, que les reconozca el derecho a cobrar determinadas dotaciones, deberán conformarse con la condena a que se les pague los créditos ya devengados, sin poder obtener una condena de futuro, que obligue a la Administración a abonarles tales partidas de allí en adelante. En consecuencia, tales funcionarios, aun habiendo obtenido una sentencia a favor que haya adquirido

la calidad de firme, se verán compelidos a tener que plantear sucesivas pretensiones idénticas, año tras año (o incluso mes tras mes), para poder conseguir que la Administración les pague aquellos rubros que, de acuerdo a sentencias ejecutoriadas, tienen derecho a percibir.

Observa la Corte que, de esta manera, el sistema previsto en la norma legal impugnada, además de suponer un dispendio de tiempo y de recursos materiales ciertamente injustificable, colide gravemente con el derecho de los justiciables a una tutela judicial que sea verdaderamente efectiva”.

(..) “En las materias reguladas por la norma objetada, el justiciable no tiene una oportunidad real y efectiva de acceso a la justicia, ya que la ley directamente le prohíbe plantear pretensiones de condena de futuro contra el Estado. Por otro lado, o, si se quiere, desde otra óptica, la norma impugnada vulnera también el derecho del justiciable a contar con mecanismos efectivos de ejecución de las resoluciones de los tribunales”.

“En efecto, al no poder contar los funcionarios con una condena de futuro contra el Estado (ya que la ley prohíbe su dictado), solo podrán promover pretensiones de ejecución respecto a créditos ya devengados, pero no contarán con una vía rápida y efectiva para ver satisfechos los créditos que se vayan devengando en el futuro (pese a estar ya reconocido su derecho al cobro de las partidas mediante sentencia ejecutoriada), sino que deberán iniciar sendos procesos de conocimiento una y otra vez, para que se le reconozcan los adeudos correspondientes y solo después poder iniciar los correspondientes procesos de ejecución”.

“En definitiva, de lo que viene de señalarse, concluye la Corte que la norma en cuestión vulnera el principio de acceso a la justicia y de tutela jurisdiccional efectiva”.

B) PRINCIPIO DE IGUALDAD: Para los Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia Dres. Sosa, Dres. Martínez, Minvielle, Morales, resultó “innecesario pronunciarse sobre si se vulneró o no el principio de igualdad, pues ha quedado satisfecho el interés de los impugnantes”, al pronunciarse sobre la violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva.

No obstante, el Sr. Ministro Dr. Dr. John Pérez Brignani, *“también se encuentra vulnerado el principio de igualdad”*.

Para el Sr. Ministro, *“La justificación para dicha diferencia de tratamiento no surge de la ley y tampoco ha sido expresada, siquiera esbozada, por la parte demandada. No hay justificación razonable para permitir el dictado de sentencias de condena de futuro a favor de todos los restantes acreedores del Estado y privar de tal derecho a los funcionarios públicos que reclamen por algunos de los conceptos previstos en los artículos 86 inciso 1º y 214 de la Constitución”*.

En suma, se trata de una disposición que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional en reiterados fallos, por unanimidad, por tanto corresponde su derogación.

Montevideo, XX de mayo de 2025

CARLOS DANIEL CAMY
SENADOR DE LA REPÚBLICA